



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Ejecutivo singular
DEMANDANTE	Ángela Elisa Botero de Pérez
DEMANDADO	Martha Luz Mejía de González y Luis Fernando González Díaz
RADICADO	05001 31 03 012 2022 00238 02
DECISIÓN	Confirma auto apelado

Medellín, diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro

El Despacho resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes.

ANTECEDENTES

1.1. En providencia 11 de agosto de 2023 el Juzgado 003 de Ejecución Civil del Circuito de Medellín no accedió a la adecuación de medidas cautelares pretendida por la apoderada judicial del codemandado González Díaz; también modificó y aprobó la liquidación del crédito presentada por el apoderado judicial de la ejecutante. Lo anterior cimentado en que no era dable adecuar las medidas cautelares, en tanto, no se cumplía los presupuestos del artículo 600 del C.G.P. Por otro lado, determinó que la liquidación radicada por la parte actora no se hizo en debida forma, porque no se tuvo en cuenta los abonos del demandado.

1.2. Recursos.

1.2.1. El apoderado judicial de la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación para que se incluyera en la liquidación del crédito las costas del proceso, ejecutoriadas en la actuación desde el 8 de marzo de 2023 por un valor de \$22 400 000.

1.2.2. La representante judicial del ejecutado radicó recurso horizontal y en subsidio el de alzada. Pretendió el levantamiento o reducción de las medidas

cautelares, que se precisara cuáles eran los presupuestos del artículo 600 del C.G.P. que no se demostró y se dejara sin efectos la liquidación del crédito. Con ese fin, sostuvo que desde el escrito inicial la accionante pidió el embargo de los bienes inmuebles identificados con M.I. No. 004-12694, 004-20354, 004-21905, 004-219071 004-21017 de la ORIP de Andes, 008-8214, 008-8215, 008-37620, 008-55480 y 008-55481 de la ORIP de Apartadó. Señaló que la suma inicial pretendida era de 408.844 201, que los demandados abonaron \$200.000 y que están tramitando la venta de uno de los inmuebles embargados para pagar todo el crédito, por ello solicitaron el levantamiento del embargo, en proporción a las cuantías y al total de bienes afectados con la medida cautelar. También apuntó que respecto a la liquidación del crédito no se dio traslado, previo a la aprobación. Finalmente, advirtió que, al decretar los embargos y secuestros, el juez podía limitarlos a lo necesario; que el valor de los bienes no podía exceder del doble del crédito cobrado, los intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se tratara de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garantizaran el crédito, o cuando la división disminuyera su valor.

1.3. Surtido el traslado respectivo, el abogado de la demandante se pronunció para que no se repusiera la decisión y se negara la apelación. Refirió que la oportunidad procesal para la reducción de embargos va hasta antes de la diligencia de remate; que en virtud del inciso 4 del artículo 599 del estatuto procesal, habría que presentar unos documentos que de manera fidedigna certificaran el valor de los inmuebles aportados por la parte demandada o, que apareciera en las facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro, recibos de impuesto predial o de otros documentos oficiales. En este sentido, dijo que la diligencia de secuestro no había tenido lugar y en la solicitud del ejecutado no se aportó ningún documento que probara que las medidas cautelares fueron excesivas. Así mismo, arguyó que no era cierto que no se hubiese dado traslado a la liquidación del crédito, previo a la aprobación, pues se surtió en dos oportunidades, la primera en auto de 7 de julio de 2023 y la segunda, el día 13 de ese mismo mes; pero la parte ejecutada dejó vencer el término sin objetar la liquidación.

1.4. El juzgado de primera instancia en proveído de 30 de noviembre de 2023 resolvió los recursos de reposición de manera desfavorable, por lo cual

mantuvo incólume la decisión y concedió las alzas. Como fundamento de lo resuelto, anotó que del artículo 600 del C.G.P. se desprende que hay lugar a la reducción de embargo o levantamiento de medidas por exceso, una vez consumados los embargos y secuestros, lo que quiere decir, que dichas medidas cautelares deben ser efectivamente practicadas, exigencia lógica, si se tiene en cuenta que, cuando se logra consumir o materializar el secuestro es posible determinar si se excede el límite que el artículo 599 ibídem fija al operador judicial para garantizar el pago del crédito cobrado, los intereses y las costas procesales, es decir que mientras no se haya consumado el secuestro de los bienes embargados, mal haría el juzgado en reducir o levantar las medidas cautelares. En cuanto al traslado de la liquidación del crédito, precisó que el mismo se surtió el 13 de julio de 2023.

Por otra parte, en lo atinente al recurso propuesto por el apoderado de la ejecutante, ultimó que de acuerdo con el artículo 446 ib. la liquidación del crédito debe ajustarse a lo dispuesto en el mandamiento de pago y en la sentencia, por lo que, la refutación que se haga a la liquidación, sólo puede tener como fundamento que la misma no esté conforme con la sentencia o el mandamiento de pago. Finalmente, resaltó que, si bien las costas se liquidan conjuntamente con el crédito, lo cierto era que en virtud del numeral 7 del artículo 455 y el inciso 3 del artículo 461 del C.G.P., entre otras normas, las mismas hacían parte de la ejecución y efectivamente, cuando se remate un bien y se ordene la entrega del producto, también debe estar cubierto ese rubro.

CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 600 del C.G.P. prevé la reducción de embargos. Al respecto, la norma en cita dispone:

"ARTÍCULO 600. REDUCCIÓN DE EMBARGOS. En cualquier estado del proceso una vez consumados los embargos y secuestros, y antes de que se fije fecha para remate, el juez, a solicitud de parte o de oficio, cuando con fundamento en los documentos señalados en el cuarto inciso del artículo anterior considere que las medidas cautelares son excesivas, requerirá al ejecutante para que en el término de cinco (5) días, manifieste de cuáles de ellas prescinde o rinda las explicaciones a que

haya lugar. Si el valor de alguno o algunos de los bienes supera el doble del crédito, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, decretará el desembargo de los demás, a menos que estos sean objeto de hipoteca o prenda que garantice el crédito cobrado, o se perjudique el valor o la venalidad de los bienes embargados.*

...”. (Subraya intencional)

2.2. Por su parte, el inciso 4 del artículo 599 ibídem, prevé:

"ARTÍCULO 599. EMBARGO Y SECUESTRO. Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.

...

En el momento de practicar el secuestro el juez deberá de oficio limitarlo en la forma indicada en el inciso anterior, si el valor de los bienes excede ostensiblemente del límite mencionado, o aparece de las facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro o recibos de pago de impuesto predial, o de otros documentos oficiales, siempre que se le exhiban tales pruebas en la diligencia.

...”.

2.3. En relación con esta temática el doctrinante Ramiro Bejarano Guzmán en la obra “Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos” indica:

"En efecto, para controlar los excesos, voluntarios o no, en la práctica de las medidas cautelares, el artículo 600 del Código General del Proceso ha previsto que en cualquier momento del proceso, después de consumados los embargos y secuestros y hasta antes de que se fije fecha y hora para el remate de bienes, de oficio o a petición de parte, el juez podrá decretar la reducción de embargos cuando los considere excesivos. Con tal fin, el juez tendrá en cuenta las facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro o recibos de pago de impuesto predial o cualquier otro documento público, que la parte interesada en la reducción de los embargos le exhiba o aporte a la solicitud. En el caso de que de oficio o a petición de parte se inicie el trámite de reducción de embargos y

secuestros, se requerirá al ejecutante para que en el término de cinco días manifieste de cuáles de las medidas decretadas prescinde o para que rinda las explicaciones que considere debe ofrecer para justificar que se mantengan las medidas cautelares...”

2.4. A su vez, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC14812 de 2018 dispuso:

"Con fundamento en la norma trascrita, se puede afirmar que para que proceda la aludida «reducción de embargos», se debe dar cumplimiento a los presupuestos exigidos para ello, es decir que se puede pedir en cualquier estado del proceso, siempre y cuando se encuentren consumados los embargos y secuestros, y antes de la fecha de remate; por tanto, de acuerdo a las acreditaciones aportadas y a lo informado por la célula judicial acusada, en el sub judice, no se cumplían las exigencias del canon referido, amen que en la data en que se solicitó la disminución de las cautelas, no se encontraban secuestrados los inmuebles, incumpliendo así uno de los presupuestos de la norma, y como consecuencia, se debía negar lo pedido.”

2.5. Respecto de la liquidación del crédito, el artículo 446 del estatuto procesal establece las reglas que debe tenerse en cuenta:

"ARTÍCULO 446. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y LAS COSTAS. Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas:

1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.

...

3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación.

...”.

2.6. Por su parte, el artículo 366 ibídem, instituye las reglas de la liquidación de las costas:

"ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obediencia a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas..."

2.7. En lo atinente a este tópico la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC5043 de 2019 recordó:

"En efecto, advierte la Sala que el artículo 366 del C.G. del P., prevé que las costas y agencias en derecho serán liquidadas por el juzgado que hubiese conocido del proceso en primera instancia, una vez se encuentre ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obediencia a lo dispuesto por el superior..."

CASO EN CONCRETO

En el caso bajo examen, los recursos formulados plantean resolver si el juez tuvo razón al negar la reducción del embargo por considerar que no se daba los presupuestos para ello y, negar la modificación de la liquidación del crédito, debido a que, no era el momento procesal para liquidar las costas.

Al respecto se tiene que lo definido por el a quo se ajusta a derecho, porque, en primer lugar, en cuanto a la reducción de embargos el artículo 600 del C.G.P. prevé la necesidad de consumir el embargo y el secuestro, situación

que en el presente caso no ha ocurrido. No obstante, si en gracia de discusión se admitiera que basta con que el embargo haya sido efectivo, tampoco hay prueba del resultado de la aprehensión de los bienes embargados y de que el valor de los mismos supere en más del doble el crédito cobrado. Comenzando porque la parte interesada aportó documentos que dan cuenta del valor de sólo dos inmuebles que, a decir verdad, no llegan al límite señalado en la norma. En segundo lugar, en relación con la liquidación del crédito, el juzgador de primer grado también acertó, pues no es momento procesal para que las costas procesales sean liquidadas.

En este orden de ideas, se tiene que, desde la presentación de la demanda se solicitó el embargo y secuestro de los bienes inmuebles identificados con M.I. No. 004-12694, 004-20354, 004-21905, 004-21917, 004-21907 de la ORIP de Andes, 008-8214, 008-8215, 008-37620, 008-55480 y 008-55481 de la ORIP de Apartadó, inmuebles frente a los cuales la medida de embargo se hizo efectiva; pero, no han sido secuestrados. Posteriormente, la apoderada judicial de Luis Fernando González Díaz radicó memorial en que pretendió la reducción de los embargos, bajo el argumento de que los bienes afectados con las cautelas excedían del límite establecido y para demostrar lo anterior, adjuntó copia del impuesto predial de los inmuebles identificados con M.I. No. 008-55480 y 008-55481 de la ORIP de Apartadó en que se observa que el valor catastral de los predios es de \$98 630 609 y \$151 174 867, respectivamente. Es decir que, como el juez de instancia bien señaló, que, este no es el momento procesal para solicitar la reducción de embargos, porque los inmuebles aún no han sido secuestrados; adicionalmente, si bien la parte interesada allegó unos documentos con el fin de demostrar el valor de dos de los bienes embargados, lo cierto es que, no aportó otros medios suasorios que permitieran conocer el valor de los demás inmuebles afectados con las medidas cautelares; así mismo, del valor referido se infiere que este no supera el doble del crédito adeudado, pues actualmente, la deuda está liquidada en \$310 951 601 y la suma de los predios de los cuales se conoció el valor es de \$249 805 476, lo que denota que ni aún cundo hubieren sido aprehendidos, se cumple que su valor supere el límite previsto en el inciso 3 del artículo 599 del C.G.P.

En lo atinente a la liquidación del crédito, este despacho encuentra que la decisión de primera instancia atiende los postulados normativos sobre la

materia, pues según el artículo 366 del estatuto procesal, las costas y agencias se liquidarán cuando la decisión que finalice el trámite quede ejecutoriada, o una vez notificado el auto de obediencia a lo decidido por el superior. Procedimiento que en este caso no ha culminado, pues la deuda no ha sido cancelada ni los bienes embargados han sido rematados, para que con el producto se pague el crédito.

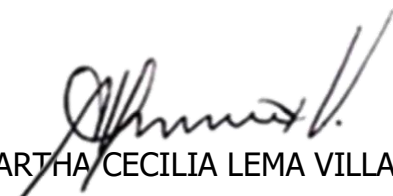
Así las cosas, la decisión proferida por el Juzgado 003 de Ejecución Civil del Circuito de Medellín el 11 de agosto de 2023, será confirmada.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión adoptada en auto de 11 de agosto de 2023, proferida por el Juzgado 003 de Ejecución Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO. Sin condena en costas porque no se causaron.

NOTIFÍQUESE



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada